

Santiago, once de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 740-2011, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, se absolvió a Luis Alberto Jeldres Olivares y a Alcicio del Carmen Muñoz Mori de la acusación que les fuera formulada de ser autores del delito de homicidio calificado de José Miguel Vargas Valenzuela, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, en la comuna de Barrancas, por encontrarse prescrita la acción penal ejercida. En lo civil, como consecuencia de la absolución, se rechazó la demanda ejercida por José Miguel Vargas Galvez en contra del Fisco de Chile y de los sentenciados Geldrés Olivares y Muñoz Mori.

Apelado dicho pronunciamiento, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintinueve de mayo último, a fojas 773, lo confirmó.

Contra ese fallo el Programa Continuación Ley N° 19.123, del Ministerio del Interior y la parte demandante dedujeron sendos recursos de casación en el fondo, como se desprende de fojas 781 y 804, respectivamente, los que se ordenaron traer en relación por decreto de fojas 843.

Considerando:

Primero: Que el recurso de casación en el fondo promovido en representación del Programa Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior se funda en la causal 5ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciándose infracción al artículo 433 N° 7 del mismo cuerpo legal, en concordancia con los artículos 7, 93 N° 6, 94, 95 y 391 N° 2 del Código Penal y 6 del Estatuto del Tribunal Internacional del Nüremberg.

Se plantea por el impugnante que los hechos que el fallo ha dado por demostrados constituyen un delito de lesa humanidad, pues no se trata de un suceso aislado y casual, sino que formó parte de la ejecución de una política de estado de control del orden público, contraria a los derechos humanos y constitutiva de un ataque generalizado o indiscriminado en contra de la población civil. En tales circunstancias, la acción penal que de ellos emana es imprescriptible, condición que surge de normas que poseen un valor universal, por ser consideradas ius cogens, cuyo carácter imperativo se desprende del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, como sucede con el artículo 6 del Estatuto del Tribunal de Nüremberg, con los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nüremberg, elaborados y sistematizados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y con la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Por último, también para efectos interpretativos,

ha debido tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley N° 20.357, que precisa las circunstancias que definen los delitos de lesa humanidad.

A partir de esta normativa es posible sostener que todo secuestro u homicidio perpetrado en ejecución de la política de estado imperante en la época, plasmada en el Decreto Ley N° 3, de 11 de septiembre de 1973, posteriormente sistematizado por el Decreto Ley N° 640 y modificado por el Decreto Ley N° 1.009, constituye un crimen contra la humanidad.

De haberse aplicado correctamente el derecho no pudo arribarse a la decisión absolutoria alcanzada, por lo que, en la conclusión, se solicita la invalidación del fallo y, acto continuo, se dicte la sentencia de reemplazo que haga efectiva la responsabilidad de los acusados en el delito de homicidio cometido en la persona de José Miguel Vargas Valenzuela.

Segundo: Que en términos similares a los relacionados en el motivo anterior la parte demandante formalizó recurso de casación en el fondo, también motivado en la causal 5ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, dada la infracción a los artículos 433 N° 7 del referido cuerpo legal y 7, 14, 15 N°1, 93 N° 6, 94, 95 y 391 N° 2 del Código Penal.

Se expresa en este caso, además, que los hechos generan responsabilidad para la administración porque fueron perpetrados por agentes policiales con un evidente propósito político, que compromete la responsabilidad del Estado pues la falta se ha cometido en ejercicio de un cargo o con ocasión del mismo, lo que coloca al suceso delictivo en la esfera del derecho público, donde no cable aplicar por analogía las normas sobre prescripción extintiva, propias del derecho privado, consagradas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Consecuencialmente, han quedado sin aplicación los artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, 4 y 44 de la Ley N° 18.575, los tratados y convenios internacionales vigentes y suscritos por Chile, en especial los Convenios de Ginebra, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Sociales, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el Tratado sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, las normas de ius cogens y los Principios del Derecho Humanitario Internacional

Finaliza solicitando que se anule la sentencia impugnada y se dicte la correspondiente de reemplazo que haga efectiva la responsabilidad penal de los inculpados imponiéndoles la pena acorde al delito de homicidio calificado cometido y se dé lugar a la demanda por daño moral conjunta y solidariamente en contra de los acusados y en contra del Fisco, con costas.

Tercero: Que sin perjuicio de lo antes relacionado, del análisis del pronunciamiento impugnado, que reproduce sin modificaciones el del a quo, se desprende que este adolece de manifiesta falta de fundamentos.

En efecto, el considerando tercero del fallo de primer grado, al momento de establecer los hechos, consigna que los agentes estatales contra quienes se formuló acusación, el 16 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 02:15 horas, luego de conminar a la víctima José Vargas Valenzuela a detener el vehículo que conducía, decidieron disparar al móvil mientras este se encontraba en movimiento, a consecuencia de lo cual el conductor resultó herido, por lo que fue trasladado a la Posta 3 de la Asistencia Pública y a los días después a la Posta Central, falleciendo el 27 de septiembre del mismo año, “siendo viable que las lesiones se hayan generado en una herida a bala, aunque no puede aseverarse, dada la destrucción y distorsión de la anatomía abdominal ...”. Añade el motivo cuarto, que de los hechos así descritos “no permite adquirir convicción acerca que las lesiones que provocaron la muerte de José Miguel Vargas Valenzuela sean consecuencia de una herida a bala ...” y que “se plantean aún dudas acerca de la posición de los involucrados, de la víctima, de la lesión por ésta sufrida y la ubicación del vehículo”. Por su parte, el motivo sexto apunta que los acusados asumieron que la víctima intentaba huir, pues no se detuvo a la voz de alto, por lo que dispararon con sus armas de servicio al lugar donde se encontraba, “acciones que si bien no se justifican porque se atenta contra la vida de las personas, no son suficientes para conformar el delito de homicidio calificado, ..., porque no se contienen todos los elementos constitutivos del tipo, aunque sí el delito de homicidio simple”. En el fundamento séptimo se afirma que “... no nos cabe duda que estamos en presencia de un homicidio ...”, sin embargo, en el basamento undécimo, se llega a la conclusión que “a las dificultades observadas para calificar el tipo delictivo, se agregan aquellas relativas a determinar con absoluta seguridad y certeza ... la responsabilidad que en estos hechos le cabe a cada uno de los procesados, todas vez que las pericias balísticas han resultado vagas para colegir cuál de los encausados es el que efectúa el disparo que presumiblemente lesiona a la víctima, reiterando presumiblemente, por la vacilación planteada en la autopsia acerca de que la lesión de la víctima fuere finalmente provocada por una herida a bala”.

Cabe añadir que se terminó por absolver a los acusados, tras resolverse que el plazo de prescripción de la acción penal ejercida para perseguir el delito de homicidio simple se encontraba cumplido.

Cuarto: Que ante la evidente contradicción de raciocinios fácticos que permitan sustentar la decisión del tribunal, desde que no es posible sostener con

certeza si se alcanzó pleno convencimiento acerca de la perpetración de un delito, se ha incurrido en el motivo de casación formal que contempla el artículo 541 N° 9°, en conexión con el artículo 500 N° 4°, ambos del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la resolución en examen carece de las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no acreditados los hechos que se atribuyen a los procesados.

Quinto: Que acorde con ello y visto lo prescrito en el artículo 535 inciso primero del Código de Procedimiento Penal, en relación con lo estatuido en el artículo 775 del de Procedimiento Civil, esta Corte se encuentra facultada para invalidar la indicada resolución, desde que se dan en la especie los presupuestos que permiten al tribunal proceder de oficio y siendo patente el vicio que afecta al fallo en estudio, hará uso de dicha atribución, anulando la sentencia por la causal antes precisada. No fue posible oír a las partes sobre este punto por haberse constatado el vicio en la fase de acuerdo.

Sexto: Que por lo razonado precedentemente los recursos de casación en el fondo promovidos se tendrán por no formulados.

Por consiguiente y visto lo ordenado en los artículos 535, 500, N° 4°, 541, N° 9°, y 544 del Código de Procedimiento Penal; 764, 765, 775 y 808 de su homónimo de Procedimiento Civil, se invalida de oficio el fallo de veintinueve de mayo de dos mil quince, que se lee a fojas 773, por lo que acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicta la sentencia de reemplazo que corresponde.

Atento lo resuelto, se tienen por no interpuestos los recursos de casación en el fondo formalizados a fojas 781 y 804.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Cisternas.

Rol N° 8706-15.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y los abogados integrantes Sres. Jean Pierre Matus A., y Rodrigo Correa G. No firman los abogados integrantes Sres. Matus y Correa, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausentes.

Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a once de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.